

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D C, dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022).

Ref. 2015-00402.

Radicado No.: 11001 40 03 019 2015 00402 00
Demandante: JAVIER ALDEMAR TORRES PULIDO.
Demandado: SOLCIVILES LTDA y SOCIEDAD ESTRUCTURAS Y
DETALLES S.A.S.
Proceso: Ejecutivo singular.
Instancia: Primera Instancia.

I. ASUNTO A TRATAR

Procede este despacho a decidir de fondo el proceso de la referencia, emitiendo el fallo de primera instancia que dirime la controversia surgida entre las partes, teniendo en cuenta lo siguiente:

II. ANTECEDENTES

Pretensión

JAVIER ALDEMAR TORRES PULIDO, actuando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva singular de menor cuantía contra SOLCIVILES LTDA y SOCIEDAD ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S, sociedades que hacen parte del CONSORCIO ALIANZA URBANA, con el fin de obtener el pago de la suma de \$29'150.000 por concepto del capital contenido en el acuerdo conciliatorio, suscrito el 30 de abril de 2015 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera desde el 17 de junio de 2015 hasta que se verifique el pago total de lo adeudado. (fl 24, c.1.).

Fundamentos fácticos

Para fundamentar sus pretensiones la parte actora adujo en síntesis que:

1. El 26 de abril de 2014 suscribió contrato de promesa de compraventa con el señor German Camilo Alfonso González, en calidad de representante legal de la sociedad SOLCIVILES LTDA y el señor José Alfredo Góngora Godoy, en calidad de representante legal de la sociedad ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S, quienes hacen parte del CONSORCIO ALIANZA URBANA respecto del inmueble ubicado en la Carrera 8 B No. 160-39, apto 202, torre 1.
2. El precio de dicho negocio jurídico se pactó en la suma de \$89.000.000 que debía pagarse: **i)** el 26 de abril de 2014 el monto de \$4.000.000 equivalente al 4,49%, **ii)** el 9 de mayo de 2014 la suma de \$25.000.000 y **iii)** \$59.850.000 al momento de la entrega del inmueble.
3. El 13 de mayo de 2014 el demandante Javier Aldemar Torres Pulido pagó la suma de \$25.150.000.
4. Solicitó un crédito ante una entidad bancaria que fue negado, toda vez que, el Consorcio Alianza Urbana incurrió en “vicios” en los documentos aportados, situación que fue informada sin que se diera respuesta alguna.
5. El 30 de abril de 2014 se convocó a la parte demandada a audiencia de conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en dicha diligencia sólo se hizo parte el señor Carlos Augusto Zuluaga Herrera en calidad de representante legal del Consorcio Alianza Urbana y Solciviles Ltda, quien se comprometió a cancelar al señor Javier Aldemar Torres Pulido la suma de \$29.150.000 el 16 de junio de 2014.
6. Las sociedades convocadas no cancelaron la suma acordada tratándose de una obligación, clara, expresa y exigible que emana de un acuerdo conciliatorio que tiene fuerza ejecutiva de conformidad con la ley. (fls 22 y 23 c.1).

III. ACTUACIÓN PROCESAL

1) Mediante auto adiado 18 de diciembre de 2015 se libró mandamiento de pago a favor de JAVIER ALDEMAR TORTRES PULIDO contra SOLCIVILES LTDA y ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S, por la suma de \$29.150.000, por concepto del capital representado en el acta de conciliación aportada como base de la ejecución, y los intereses legales a la tasa del 6% anual desde el 17 de junio de 2015 hasta que se verifique el pago total de lo adeudado. (Fl. 30 *ibídem*).

Posteriormente, en auto de 9 de diciembre de 2016, se dispuso corregir la orden de apremio en el sentido de indicar que las sociedades demandadas hacen parte del Consorcio Alianza Urbana.

2) La demandada Solciviles Ltda se notificó de forma personal a través de su representante legal, según acta vista a folio 39 de la presente encuadernación, quien dentro del término legal contestó la demanda formulando las excepciones denominadas:

2.1. NO CONSTITUIR TÍTULO EJECUTIVO EL INSTRUMENTO ANEXO CON LA DEMANDA, la cual fundó en que el Acta de audiencia de conciliación No. 76998 celebrada el 30 de abril de 2015, no cumple con los requisitos consagrados en el artículo 422 del C.G.P., pues en la misma no aparece expresa manifestación de los demandados de obligarse a pagar una suma de dinero, en tanto que, se trata tan sólo de un compromiso adquirido por el Consorcio Alianza Urbana y Solciviles (Soluciones Civiles Integrales), personas jurídicas contra quienes no se libró mandamiento ejecutivo, de cancelar una suma que no es clara en cuanto a su denominación en cifras y letras.

Indicó que, el título no es claro frente deudor y el objeto de la prestación, toda vez que, según se desprende de los hechos de la demanda y el contrato de promesa de compraventa las partes que celebraron tal negocio son el demandante Javier Aldemar Torres Pulido como comprador y la sociedad Consorcio Alianza Urbana como vendedora, a quien se convocó y concilió el asunto puesto a consideración, desconociendo que ese tipo de asociaciones no gozan de personalidad jurídica.

2.1. FALTA DE LOS PRESUPUESTOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 488 DEL C.P.C., PARA QUE EL DOCUMENTO ANEXO CON LA

DEMANDA TENGA LA CALIDAD DE TÍTULO EJECUTIVO. La sociedad ejecutada señaló nuevamente que la suma relacionada en el título ejecutivo no es clara habida cuenta que, no coincide el valor indicando en letras con el valor indicado en números, luego entonces, no se cumplían los presupuestos para librar mandamiento de pago.

Indicó que la exigibilidad del título tampoco está dada como quiera que la misma se condicionaba al cumplimiento de lo acordado por las partes en punto de dar por terminada y nula la promesa de compraventa celebrada con relación al inmueble ubicado en la Carrera 8 B No. 160-39 de Bogotá y la presunta demandada a consignar la confusa suma de dinero, circunstancias que el demandante no acreditó, amén que no probó haber requerido a los vendedores a fin de constituirlos en mora. (fls 57 a 64 c.1.).

3) Estructuras y Detalles S.A.S se notificó de forma personal a través de su representante legal según acta vista a folio 141 de la presente encuadernación, quien dentro del término legal se opuso a las pretensiones de la demanda interponiendo el medio exceptivo de:

PAGO TOTAL POR INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN: Sustentó dicha excepción en que al momento de ser contraída la obligación con el ejecutante no se encontraba asociada con Solciviles Ltda y por tanto no hacía parte del Consorcio Alianza Urbana de ahí que tampoco tenía obligaciones que cumplir. Agregó que para la data en que se celebró el contrato de compraventa con el actor no pertenecía al consorcio en mención habida cuenta que desde el 5 de marzo de 2013 mediante escritura pública No. 0734 de la notaría sexta del círculo de Bogotá cedió sus activos a Solciviles Ltda, por tanto, las obligaciones estructuradas con posterioridad a dicha data se encuentran en cabeza de la referida sociedad (fls.157 a 160 c.1.).

4) Mediante autos de 6 de julio de 2016 y 12 de noviembre de 2019 se corrió traslado a la parte actora de las excepciones, quien dentro del término legal concedido se opuso a la prosperidad de las mismas, aduciendo que el acta de conciliación báculo de la acción cumple con los requisitos para prestar mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Ley 640 de 2001, amén que hace tránsito a cosa juzgada, es decir, los efectos de una sentencia que impone obligaciones a las partes.

En ese sentido, el acta suscrita el 30 de abril de 2015 contempla una manifestación expresa de la parte demandada y contiene una obligación plenamente exigible como quiera que el pago no se realizó en la fecha pactada.

De otro lado frente a la excepción formulada por Estructuras y Detalles S.A.S manifestó que, las sociedades demandadas conforman el consorcio Alianza Urbana con participaciones equivalentes al 50% y si bien por medio de la escritura pública 0734 de la Notaría 6ª del Círculo de Bogotá se realizó una cesión de derechos lo cierto es que la misma es nula de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.

IV. PROBLEMA JURÍDICO

Observa el despacho que el problema jurídico en el presente asunto radica en determinar si se debe ordenar seguir adelante la ejecución o alguna de las excepciones planteadas por la parte ejecutada tienen la virtualidad de enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado.

V. CONSIDERACIONES

1. Cumple precisar que se reúnen a cabalidad los denominados presupuestos procesales necesarios para la normal configuración y trámite del litigio, a saber, la capacidad de las partes, demanda en forma y competencia del Juzgado, obran en el expediente y no se observa causal de nulidad alguna que conlleve a invalidar lo actuado en todo, o en parte, pues se advierte que los diferentes actos procesales se adelantaron con arreglo a las normas que los gobiernan.

En ese sentido, en cuanto al primer requisito para que un documento pueda ser considerado título ejecutivo, es decir, la **claridad**, implica que la obligación en él contenida se encuentre estructurada de forma lógica, racional y precisa, de manera que, exista plena certeza respecto del objeto de la prestación y de los individuos intervinientes, la persona que se encuentra obligada a cumplir, así como, aquel en favor de quien se ejecutará la misma.

Frente a la condición de **expresividad**, éste consiste en que el contenido del documento debe ser entendible sin que haya lugar realizar una interpretación más allá de la información plasmada en el cuerpo del título

basándose en suposiciones o presunciones que den cuenta de la existencia o condiciones de la obligación y finalmente, **la exigibilidad** determina que la obligación pueda ser cobrada por cuanto debe incorporar la forma de vencimiento estando ligada íntimamente al plazo y la condición.

En tal sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el estudio de una acción constitucional, con relación a este tópico precisó:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”¹ (énfasis del despacho).

2. En aras de satisfacer tal exigencia, el extremo demandante aportó con el libelo introductor el Acta Audiencia de Conciliación No. 76998 celebrada el 30 de abril de 2015 en la que se evidencia un ACUERDO en virtud del cual CARLOS AUGUSTO HERRERA como representante del CONSORCIO ALIANZA URBANA y representante legal suplente de la Compañía SOLCIVILES LTDA, se compromete con JAVIER ALDEMAR TORRES PULIDO a consignar en la cuenta de ahorros No. 74130554 el valor de \$29.150.000 el día martes 16 de junio de 2015.

Documento que, en principio, cumple a cabalidad con las exigencias previstas en el artículo 422 del C.G.P., pues acredita la existencia de una obligación clara, expresa y exigible.

¹ CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria STC3298-2019, M.P. Luis Armando Tolosa

3. Precisado lo anterior, por cuanto la parte demandada presentó oposición a las pretensiones de la demanda, se procede a analizar la viabilidad de las excepciones formuladas.

3.1. NO CONSTITUIR TÍTULO EJECUTIVO EL INSTRUMENTO ANEXO CON LA DEMANDA y FALTA DE LOS PRESUPUESTOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 488 DEL C.P.C., PARA QUE EL DOCUMENTO ANEXO CON LA DEMANDA TENGA LA CALIDAD DE TÍTULO EJECUTIVO.

3.1.1. El despacho analizará de forma conjunta las excepciones antes mencionadas, que fueran formuladas por la sociedad ejecutada SOLCIVILES LTDA SOLUCIONES INTEGRADAS, toda vez que, ambas se fundamentan en el hecho que el documento aportado como base de la acción no cumple con los requisitos procesales para que pueda demandarse ejecutivamente.

Para resolver el asunto objeto de estudio resulta de carácter imperativo traer a colación lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y el precedente jurisprudencial, en punto de la conciliación, entendida como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas, adelantan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la asistencia de un tercero neutral y calificado denominado conciliador.²

Bajo esta perspectiva, cumple precisar que la figura en comento comporta dos elementos, uno sustancial en la medida que el acuerdo celebrado se traduce en un verdadero negocio jurídico y, un elemento procesal o jurisdiccional en la medida que el acto conciliatorio se surte por medio de unas etapas predeterminadas, tiene efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Al respecto el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil, precisó:

“Como mecanismo alterno en la solución de conflictos la conciliación se compone de dos elementos: a) uno sustantivo o material, toda vez que el acto objeto de la conciliación es un negocio jurídico para solucionar un conflicto subjetivo de intereses susceptible de transacción o desistimiento; y b) otro procesal o jurisdiccional, en cuanto se forma por medio de unas etapas y requiere la intervención de un tercero neutral que, según el artículo 116 de la Constitución, es investido transitoriamente de la función de administrar justicia, además del ya

² Artículo 1 del Decreto 1818 de 1988.

*citado efecto de cosa juzgada que emana del acto conciliatorio y **su estructuración como título ejecutivo en los eventos que genere obligaciones.***

*La conciliación tiene una especial naturaleza bifronte, sustancial y procesal, conforme a lo explicado, pero al ser un negocio jurídico para la solución de diferencias, avalado por el conciliador, llámese juez u otro funcionario o un particular, tal aquiescencia le otorga fuerza de cosa juzgada y **el mérito ejecutivo.***³ (Énfasis fuera del Despacho).

En esta línea, frente al mérito ejecutivo que se deriva de un acuerdo conciliatorio, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en el estudio de una acción constitucional y citando al Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil, señaló: “...del acuerdo conciliatorio pueden emerger obligaciones para las partes, que no por haberse dado en tan especial estadio procesal, quedan en libertad de cumplirlas o no, sino que tal y como ellas se conciben, perfectamente pueden hacerse realizar coercitivamente”⁴

Conforme a lo expuesto en precedencia, en el entendido que el acta de conciliación válidamente celebrada adquiere los efectos jurídicos de una sentencia judicial, en tanto que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, en cuanto a su contenido, para que pueda solicitarse el cumplimiento forzoso de las obligaciones allí consignadas, el artículo 1° de la Ley 640 de 2001 establece que se deben acreditar los siguientes presupuestos: **i)** Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación, **ii)** Identificación del Conciliador, **iii)** Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia, **iv)** Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación y **v)** El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas.

3.1.2. Como argumentos centrales de los medios exceptivos manifiesta el extremo pasivo que el título base de la ejecución no contiene una obligación:

II) Clara en lo que tiene que ver con el deudor y el objeto de la prestación, toda vez que las personas que suscribieron el acta de conciliación aportada- CONSORCIO ALIANZA URBANA y SOLCIVILES (SOLUCIONES

³ Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil, rad. 110013103043-2004-00475-01 (Exp. 4185) de fecha 8 de marzo de 2016.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, STL8444-2018, Radicación No. 08237 M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

CIVILES INTEGRALES) no figuran como demandados pues quienes integran la parte pasiva son SOLCIVILES LTDA y SOCIEDAD ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S. y con relación a la suma reclamada la misma resulta confusa como quiera que existe disconformidad entre el valor consignado en letras y la cifra determinada en números

II) Expresa en la medida que no se distingue una manifestación de la parte demandada de obligarse a pagar una suma de dinero a favor del demandante, sino que se hace referencia a una simple consignación.

III) Exigible toda vez que la obligación que se pretende ejecutar se encontraba sometida al cumplimiento de unas obligaciones consistentes en que se diera por terminada y nula la promesa de compraventa de respecto del inmueble ubicado en la Carrera 8 B No. 160-39, apto 202, torre 1 y que por parte de la parte demandada se consignara una suma de dinero además en el acta de conciliación objeto de recaudo se señalan dos fechas distintas para el para el pago 16 de junio de 2015 y 13 de mayo de 2015.

3.1.3 En atención a las líneas esbozadas descendiendo al caso puesto a consideración del despacho se advierte que el título adosado con la demanda lo constituye el Acta de Audiencia de Conciliación No. 76998 celebrada el 30 de abril de 2015 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el numeral primero del acuerdo conciliatorio en mención se evidencia con claridad que el señor Carlos Augusto Zuluaga Herrera, actuando en representación del Consorcio Alianza Urbana y en calidad de representante legal de la sociedad Solciviles Ltda, se obligó a consignar en favor del demandante JAVIER ALDEMAR TORRES PULIDO la suma de \$29.1250.000 en una cuenta de ahorros el 16 de junio de 2015.

A su vez, en el numeral 2º del acta en comento, las partes pactaron que en caso de incumplimiento de dicho pago el señor JAVIER ALDEMAR TORRES PULIDO se encontraba facultado para cobrar un interés mensual del 2.5% desde el día 13 de mayo de 2014, fecha en la que se consignó el dinero a nombre del Consorcio Alianza Urbano.

3.1.4. De lo anterior se desprende que el documento aportado como báculo de la acción contrario a lo expuesto por la parte ejecutada cumple a

cabalidad con las exigencias previstas en el artículo 1º de la Ley 640 de 2001, tratándose de esta clase de actos en que se acude al mecanismo alternativo para la solución de conflictos allí regulado, pues se señalan las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo el acuerdo conciliatorio, se identifica de forma precisa a la conciliadora quien suscribió el acta No. 76998 de fecha 30 de abril de 2015, se identifican las personas citadas con señalamiento expreso de las que asistieron a la audiencia, que no son otros que los señores Javier Aldemar Torres Pulido y Carlos Augusto Zuluaga Herrera, el motivo de la conciliación y el acuerdo al que arribaron las partes con indicación de la cuantía y las condiciones para el cumplimiento, amén que acredita la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del extremo demandado y a favor del ejecutante, es decir, reúne los requisitos del artículo 422 del C. G. del P, por tanto, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

En efecto, en cuanto al requisito de claridad se denota que por un error mecanográfico se incurrió en una imprecisión respecto de la suma a cancelar determinada en palabras pues, se señaló que el monto corresponde a “VEINTINUEVE MILLONES CIENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE” empero esta circunstancia fue superada como quiera que de manera concomitante se hace referencia a la cifra en números indicando que el monto a consignar es de **\$29.150.000**, siendo éste el objeto de la prestación que aquí se ejecuta, es que no se puede perder de vista que las disposiciones contempladas en los artículos 619 y subsiguientes del Código de Comercio sólo son aplicables cuando a las relaciones derivadas de los títulos valores, sin ser este el caso, pues el acta de conciliación en sí misma presta mérito ejecutivo y no puede ser equiparada a los instrumentos de que trata la normatividad mercantil, de ahí que carezca de relevancia jurídica el yerro enunciado y de manera alguna basta esta situación para restar validez al título aportado o desvirtuar la orden de pago librada, aunado a ello, cumple precisar que la suma indicada es la misma que se relacionó en las pretensiones de la solicitud de conciliación.

Frente al segundo reparo efectuado, consistente en la falta de claridad acerca del deudor se advierte que en últimas al elemento al que hace referencia SOLCIVILES LTDA cuando afirma que el mandamiento de pago no se libró conforme al acta de conciliación adosada es la legitimación en la causa por pasiva, aspecto que más adelante se estudiará de forma detallada.

De otro lado, no existe duda con relación al requisito de expresividad habida cuenta que se encontraba debidamente delimitada la obligación a cargo de la sociedad Solciviles Ltda consistente en consignar la suma de dinero en mención en la cuenta de ahorros No. 720-91888-2 del Banco AV Villas a favor de la parte actora, sin lugar a interpretaciones adicionales, como equivocadamente aduce el excepcionante no era menester que se indicara que se debía pagar determinado valor, cabe aclarar que se trata de un compromiso en virtud del cual las partes intervinientes se encontraban en el deber de honrar los aspectos que fueron materia de conciliación, sin que pueda condicionarse el cumplimiento del convenio a que se señalara de manera expresa la palabra “pagar”, máxime si en cuenta se tiene que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer y se itera las reglas atinentes a los títulos valores no son aplicables en el asunto de marras.

Finalmente, respecto de las obligaciones sometidas a condición el artículo 1530 del Código Civil las define como aquellas cuyo cumplimiento se encuentra supeditado a un acontecimiento futuro que puede suceder o no, de manera que se distingue del plazo en la medida que, su concurrencia es incierta y aun cuando en éste también existe una idea temporal de un hecho futuro, no hay duda respecto de su perfeccionamiento pues el mismo se encuentra estipulado a una fecha concreta y determinada, en ese sentido, la condición no se presume debe ser pactada de forma expresa por las partes o la ley, de modo que debe ser cumplida en la forma acordada, la normatividad civil las clasifica en: **i)** positivas, **ii)** negativas, **iii)** potestativas, **iv)** casuales, **v)** mixtas, **vi)** resolutivas y **viii)** suspensivas.

En ese orden de ideas, no se advierte que la exigibilidad de las obligaciones cuyo cobro se pretenden estuviesen sometidas al cumplimiento de una condición, por el contrario, su exigibilidad se pactó por las partes a un día cierto y determinado, esto es, el 16 de junio de 2015, bastando el vencimiento del plazo para constituir al deudor en mora de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil.⁵

Ahora bien, revisado el contenido de la cláusula 3º del acuerdo conciliatorio se observa que la terminación del contrato de promesa de compraventa celebrado entre el señor Javier Aldemar Torres Pulido con el

⁵ Artículo 1608 del Código Civil: El deudor está en mora: 1) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.

Consortio Alianza Urbana simplemente se acordó, como una consecuencia del cumplimiento de la obligación principal en cabeza del deudor sin que de manera alguna pueda tomarse como una condición para efectos de la exigibilidad del título ejecutivo.

De forma textual, se señaló en el documento base de la acción *“Las partes acuerdan que de cumplirse lo manifestado en el numeral primero de esta acta, se da por terminado y nula la promesa de compraventa del apartamento 202 de la torre uno, parqueadero número uno y deposito G, ubicada en la carrera 8B #160-39 de la ciudad de Bogotá”*

3.1.5. En ese orden de ideas, establecido como está que el acta de conciliación No. 76998 de fecha 30 de abril de 2015 contiene una obligación clara, expresa y exigible, las excepciones formuladas de cara a estos aspectos no se encuentran llamadas a prosperar.

3.2. PAGO TOTAL POR INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN:

Estructuras y Detalles S.A.S sustentó dicha excepción en que al momento de ser contraída la obligación con el ejecutante no hacía parte del consorcio Alianza Urbana, toda vez que, mediante escritura pública No. 0734 de la Notaría Sexta del círculo de Bogotá otorgada el 5 de marzo de 2013 cedió los derechos derivados del contrato de colaboración a la sociedad Solciviles Ltda, lo que en últimas se traduce en la ausencia de legitimación para resistir las pretensiones de la acción y no un pago como equivocadamente aduce el excepcionante.

En razón a lo anterior y verificado el contenido de las excepciones formuladas, procede el despacho a analizar la legitimación en la causa por pasiva en cabeza de las sociedades ejecutadas.

Para resolver ha de recordarse que la legitimación en la causa de los extremos de la Litis, consiste en ser la persona, que de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, para que por sentencia de fondo se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídico sustancial pretendida en la demanda, es decir, ser sujeto activo o pasivo de dicha relación de manera tal que le legitime para intervenir en el proceso iniciado.

Tal facultad o poder no se refiere al derecho sustancial en sí, sino únicamente a la posibilidad de recurrir, afirmando tener derecho de algo o sobre algo e imputando que otro (el demandado) es el llamado a satisfacer su pretensión.

Al respecto nuestra H. Corte Suprema de Justicia, expresó: *“La legitimación en la causa, según concepto de Chiovenda acogido por la Corte, “consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)” (Instituciones de Derecho Procesal Civil 1.185). Conviene desde luego advertir, como ya lo ha dicho esta Sala que cuando el maestro italiano y la Corte hablan de “acción” están empleando el vocablo como sinónimo de “Derecho de pretensión” que se ejercita frente al demandado. “Para que esa pretensión sea acogida en la sentencia es menester entre otros requisitos que se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado. De donde se sigue que lo concerniente a la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del derecho procesal, razón por la cual se ausencia no constituye impedimento para desatar el fondo del litigio sino motivo para decidirlo en forma adversa al actor”.* (G.J.T. CLXVI, pág.636)

3.2.1 Ahora bien, frente a la naturaleza jurídica de los consorcios y uniones temporales, el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, precisa que el consorcio se configura: *“Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.”*

De lo anterior se desprende que se trata de agrupaciones de contratistas u organizaciones empresariales que se asocian en pro de un interés económico, sin embargo, dicha unión no configura una persona jurídica nueva e independiente respecto de los miembros que las integran.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-414 de 1994 en estudio de constitucionalidad del parágrafo 2° de la citada disposición, determinó que los consorcios no constituyen una persona jurídica distinta y su representación conjunta sólo tiene efectos frente a la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos en virtud de los cuales se efectuó dicha asociación, sobre el punto expresó:

*“El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como **un instrumento de cooperación entre empresas**, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, **pero conservando los consorciados su independencia jurídica**.”*

Bajo esta perspectiva, en lo que concierne a la capacidad para ser parte teniendo en cuenta que los consorcios carecen de personalidad jurídica es dable afirmar que sus integrantes deben ser convocados de manera independiente al proceso judicial o administrativo ajeno a las partes del contrato, por cuanto la figura de representación a que se hace referencia en la Ley 80 de 1993 se encuentra limitada a la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos suscritos conforme al acuerdo correspondiente.

Esta postura, igualmente guarda relación con la tesis desarrollada por el Consejo de Estado como máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa e intérprete de las disposiciones que rigen la contratación pública, quien por vía jurisprudencial en Sentencia de Unificación de 25 de septiembre de 2013 estableció que aunque cuentan con capacidad para actuar en los procesos judiciales por conducto de su representante legal ésta “se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la consiguiente participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, ***sin que, por tanto, la aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal***”⁶ (Énfasis fuera de texto).

3.2.1. Conforme a las anteriores precisiones, revisada con detenimiento el acta de conciliación No. 76998 aportada como base de la acción, se advierte que la misma fue suscrita por el señor Carlos Augusto Zuluaga Herrera actuando como representante legal del Consorcio Alianza Urbana y como representante legal suplente de la compañía Solciviles Ltda,

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación 25 de septiembre de 2013 (Exp. 1997-03930-01), Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez.

quienes se comprometieron a consignar la suma de \$29.150.000 en una cuenta bancaria a favor de Javier Aldemar Torres Pulido, lo que de suyo permite colegir que el aquí demandante es el legitimado para exigir el cobro de las obligaciones que allí se contemplan.

3.2.2. En el asunto particular, en lo que tiene que ver con la compañía Solciviles Ltda sea lo primero advertir que lo que se discute no es la existencia del título o que éste no fuera firmado por el señor Carlos Augusto Zuluaga Herrera, sino que el objeto de la controversia radica en que las personas contra las cuales se libró el mandamiento de pago, según su dicho, no coinciden con las que celebraron el contrato de promesa de compraventa sobre el apartamento No. 202-1 y que posteriormente suscribieron el acuerdo conciliatorio.

De lo anterior se desprende que, dicha apreciación carece de asidero jurídico porque si bien le asiste la razón al extremo demandado cuando afirma que al precitado no le estaba dado obligarse en nombre y representación del Consorcio Alianza Urbana, ya que en esta clase de asuntos, como quedó sentado en líneas precedentes este tipo de agrupaciones carecen de personalidad jurídica, lo cierto es que, el señor Carlos Augusto Zuluaga Herrera también firmó el acuerdo conciliatorio actuando en calidad de representante legal de Solciviles Ltda, circunstancia que se constató con el certificado de existencia y representación legal allegado al trámite en el que se verifica que para la época en la que se celebró la conciliación fungía como suplente del gerente.

En ese sentido, atendiendo a la presunción que preceden las actuaciones surtidas por los representantes legales se tiene que la referida sociedad se obligó de manera independiente en los términos del convenio suscitado, siendo evidente que es el ente llamado a responder por el incumplimiento endilgado y las pretensiones del escrito de demandada, sin que pueda conminarse al demandante a acudir a un proceso declarativo para la resolución del contrato de promesa tantas veces mencionado, dado que, en el presente de caso la ejecución se soporta en la conciliación realizada por las partes, la cual se itera, posee los mismos efectos jurídicos de una sentencia y no resultaba plausible jurídicamente demandar al consorcio ante la ausencia de capacidad para comparecer al proceso, de ahí que la legitimación en la causa se encuentre plenamente acreditada.

3.2.3. De otra parte, sobre la responsabilidad que le asiste a la sociedad demandada Estructuras y Detalles S.A.S de cara a las obligaciones derivadas del acta de conciliación objeto de recaudo, aunque el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 preceptúa que los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar una persona que, para todos los efectos, ejercerá su representación, no se puede olvidar, como se señaló en párrafos anteriores, que la misma resulta proporcional a la capacidad de que están revestidas estos modelos de colaboración no asociativos para actuar en el ámbito de la contratación estatal, por ende, la solidaridad que allí se predica se circunscribe igualmente única y exclusivamente a esta clase de relaciones, sin trascender al negocio constitutivo del consorcio que se regula fundamentalmente por las disposiciones pactadas por los consorciados, de manera que no puede afirmarse categóricamente que la persona designada para representar sus intereses está de por sí habilitada para comprometer la responsabilidad de todos sus miembros frente a las obligaciones contraídas con terceros, salvo que se haya designado de forma expresa por las partes.⁷

Bajo esa tesitura, a efectos de resolver la excepción impetrada, se debe dejar claridad en que el título ejecutivo que se presentó para el cobro es el acta de audiencia de conciliación No. 76998 suscrita el 30 de abril de 2015 que si bien versó sobre asuntos relativos al contrato de promesa de compraventa estructurado entre el Consorcio Alianza Urbana en calidad de promitente vendedor y Javier Aldemar Torres Pulido en calidad de promitente comprador del bien inmueble situado en la Carrera 8B No. 160-39 de la ciudad de Bogotá constituye un verdadero negocio jurídico, totalmente independiente a la relación contractual que originó la solicitud de conciliación.

En tal sentido, se advierte que al interior del asunto no obra elemento de convicción alguno que permita acreditar en debida forma el contenido de las estipulaciones, objeto, duración, extensión o alcance de la responsabilidad de las partes contratantes y en general de las condiciones y términos que regían el acuerdo de colaboración celebrado entre Solciviles Ltda y Estructuras y Detalles S.A.S., en virtud del cual se conformó el Consorcio Alianza Urbana de la que se pueda colegir la existencia de algún tipo de representación o un mandato otorgado al señor Carlos Augusto

⁷ Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, Apelación Sentencia Ejecutivo de 9 de marzo de 2016, Exp: 1100 1310 3031 2011 00491 02, M.P. Germán Valenzuela Valbuena.

Zuluaga Herrera para que éste pudiese obligarse en nombre de la referida sociedad.

Puestas así las cosas, ante la ausencia absoluta de prueba de la regulación contractual a la cual se encontraban sometidos los consorciados que pueda ser útil para referenciar la responsabilidad de sus integrantes de manera individual frente a los negocios jurídicos causados con terceros, en el caso de marras no se constata la legitimación en la causa por pasiva en cabeza de Estructuras y Detalles S.A.S habida cuenta que la persona que suscribió el acta de conciliación que constituye el título ejecutivo en el presente proceso, el señor Carlos Augusto Zuluaga Herrera, quien dijo actuar como representante legal del mentado consorcio no se encontraba habilitado para obligarse en nombre de dicha compañía. Por esta razón, no reviste relevancia jurídica las circunstancias atinentes al contrato de promesa de compraventa que originó el acuerdo conciliatorio o la validez de la cesión de derechos efectuada en favor de Solciviles Ltda que fuere protocolizada mediante escritura pública No. 0734 de 5 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 6ª del Círculo de Bogotá.

3.4. En ese orden de ideas y de acuerdo a lo expuesto en precedencia, deviene la improsperidad de las excepciones de mérito propuestas por la ejecutada SOLCIVILES LTDA y se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S, en consecuencia, se ha de ordenar seguir adelante con la ejecución, únicamente respecto de la primera de las citadas.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VII. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S, por las razones consignadas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR infundadas las excepciones de mérito propuestos por SOLCIVILES LTDA (SOLUCIONES CIVILES INTEGRALES), por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ORDENAR seguir adelante la ejecución conforme el mandamiento de pago librado empero únicamente respecto de SOLCIVILES LTDA (SOLUCIONES CIVILES INTEGRALES).

TERCERO: Decretar la venta en pública subasta los bienes embargados al demandado SOLCIVILES LTDA (SOLUCIONES CIVILES INTEGRALES) y los que posteriormente se llegaren a embargar.

CUARTO: Decretar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas dentro del proceso en contra de ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S. Librense los oficios respectivos y en caso de existir embargo de remanentes, lo desembargado deberá ponerse a disposición de la autoridad que lo solicitó.

QUINTO: Practíquese la liquidación del crédito conforme lo normado en el artículo 446 del C. G. del P.

SEXTO: Condenar en costas y perjuicios a la parte demandante y a favor de la ejecutada ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S. Para las primeras téngase en cuenta como agencias en derecho la suma \$2'000.000, para los segundos óbrese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del C.G.P.

SÉPTIMO: Condenar en costas de esta instancia a la demandada SOLCIVILES LTDA (SOLUCIONES CIVILES INTEGRALES) y a favor de la parte ejecutante. Para lo cual téngase como agencias en derecho la suma de \$2'000.0000 m./cte. Líquidense.

Notifíquese y cúmplase,⁸

IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ

⁸ Esta providencia se notificó por estado No. 62 de 17 de junio de 2022.

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **be7234648f1f7e107bfe359ba4d640ae50282b42ea1ea084762946bf9fe41e69**

Documento generado en 16/06/2022 11:54:37 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>